

Reducir las extorsiones, un esfuerzo de todos

RESUMEN EJECUTIVO

Las extorsiones afectan a toda la población en Guatemala e inciden en la percepción negativa de inseguridad en el país. A continuación, presentamos la situación actual del delito, la evolución institucional para hacerle frente y, por último, recomendaciones para continuar los esfuerzos realizados hasta ahora.

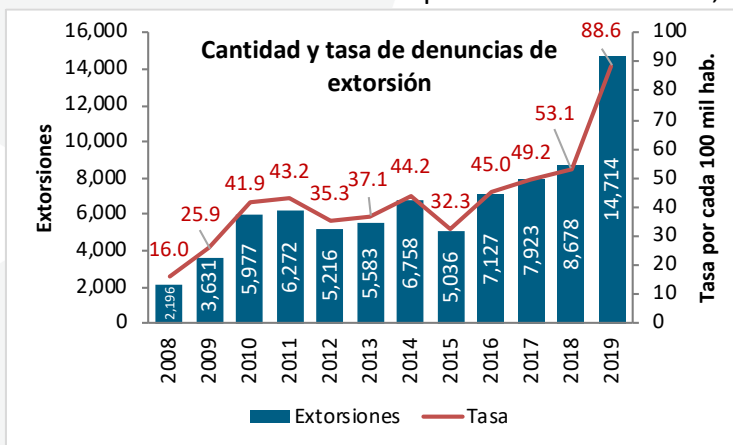
¿Qué es una extorsión?

La Real Academia Española define la extorsión como “Presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio”. Esta es una definición que encaja y resume los elementos principales del delito, tal como actualmente se entiende.

La tipificación del delito de extorsión en Guatemala se encuentra en el artículo 261 del Código Penal -CP- y los artículos 10 y 11 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada -LCDO-. Estos últimos dos delitos son las exacciones intimidatorias y la obstrucción extorsiva de tránsito, dos tipos específicos de extorsión que están relacionados al transporte público y que son cometidos por la delincuencia organizada. La pena del delito es de 6 a 12 años de prisión en el caso del Código Penal y de 6 a 8 años en los dos delitos de la LCDO mencionados anteriormente.

En años recientes, las denuncias de extorsión han incrementado

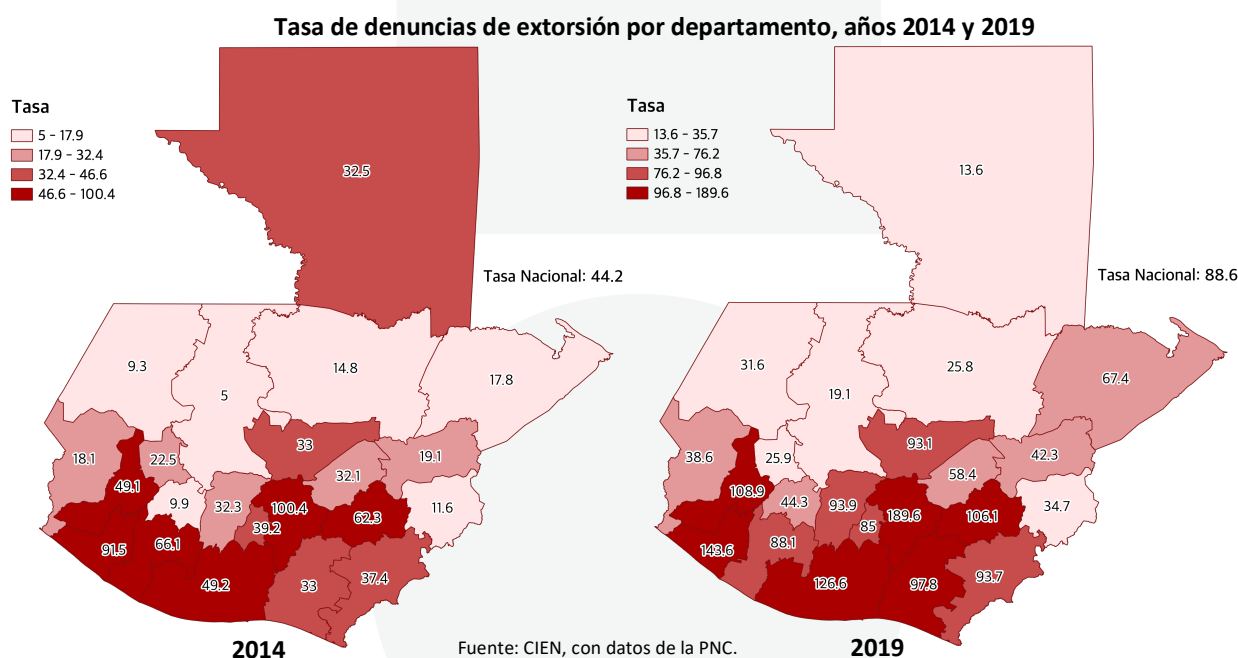
Los registros que se tienen sobre denuncias de extorsión muestran que hasta el año 2008, la cantidad era alrededor de dos mil anuales. En ese año, la tasa fue 16 extorsiones por cada 100 mil habitantes. En años posteriores, en el periodo de 2010 a 2015, las denuncias aumentaron y se mantuvieron por arriba de cinco mil, pero por debajo de siete mil anuales. Sin embargo, a partir de 2016 se observa un aumento sostenido en las denuncias, incrementando 70% entre 2018 y 2019. En este último año, la tasa fue 89 por cada 100 mil habitantes.



Hay que tomar en cuenta que la gráfica anterior muestra la cifra de denuncias realizadas por el delito de extorsión. Es importante mencionar que existe una cifra gris de no denuncia. Según la Encuesta Nacional de Percepción de Seguridad Pública y Victimización -ENPEVI-, 2018; solo el 35% de las víctimas reportó este delito, por lo que aproximadamente se denuncia una de cada tres extorsiones.

Las denuncias de extorsión y su judicialización

De más de 67 mil denuncias realizadas en el periodo 2011 a 2019, el 60% fue puesta por personas que recibieron extorsiones o amenazas de extorsión en sus residencias. Un 31% fue puesta por comerciantes y un 6% por el sector del transporte. El restante 3% son de diferentes sectores productivos extorsionados. Las tasas de denuncias por departamento muestran que el delito afecta más al área metropolitana y sur del país. Los departamentos de Guatemala, Escuintla, Jalapa, Retalhuleu y Quetzaltenango registraron las tasas más altas en 2014 y en 2019.



De 86 mil denuncias recibidas en el MP en el periodo de 2010 a julio de 2020, el 66% habían sido concluidas, el 8% de ellas al recibir sentencia, representando 4,232 casos. En el mismo periodo, el Organismo Judicial -OJ- emitió 16,250 sentencias, de las cuales el 84% fueron condenatorias, lo que significa que 13,686 personas fueron enviadas a prisión por el delito de extorsión en el periodo de once años y medio.

El fenómeno criminal de las extorsiones ha evolucionado

En el presente siglo, el delito de extorsión ha evolucionado en tres etapas. La primera etapa que comprende hasta el año 2005, cuando las pandillas realizaban el cobro de una “renta” en los lugares en donde operaban. Entre 2006 y 2011 las pandillas se fortalecieron y sus clicas empezaron a tener mayor presencia y control territorial, la “renta” se convirtió en una extorsión sistemática, lo cual reflejó en que de 2009 a 2011 fueron los años de mayor violencia contra el transporte, vinculada a cobros extorsivos. La tercera etapa corresponde al surgimiento de “imitadores”.

Después de que las pandillas hubieran sembrado el terror en la población, y que en 2009 y 2010 Guatemala hubiera alcanzado las tasas más altas de homicidios de la historia, las condiciones fueron propicias para que nuevos grupos de extorsionistas imitaran la forma en que las pandillas realizaban el cobro de extorsiones. Inicialmente los “imitadores” eran miembros del crimen

organizado que estaban cumpliendo penas en prisión y que se hacían pasar por pandilleros para hacer efectivos los cobros extorsivos. Los “imitadores” fueron identificados en el año 2015 en las investigaciones realizadas por la Policía Nacional Civil -PNC- y el Ministerio Público -MP-. Actualmente los “imitadores” ya no solo son ex miembros de grupos del crimen organizado. Cualquier recluso con acceso a un teléfono móvil puede convertirse en uno de ellos.

El 80% de las extorsiones son cometidas por “imitadores”

Aunque las distintas pandillas, e incluso las distintas clicas, operan de formas diversas, se pueden clasificar como una categoría de victimarios. Por otra parte, también, aunque los distintos imitadores pueden tener diversas formas de operar, se puede hacer un esbozo general de sus características más comunes.

Las pandillas cuentan con estructuras operativas grandes, ejercen el control territorial a través de las distintas clicas y hacen uso de la violencia. Por lo mismo, las extorsiones cobradas por las pandillas suelen ser en cifras monetarias mayores y más frecuentes. Es una extorsión sistemática en donde los sectores más afectados son el transporte y el comercio. Los investigadores estiman que el 20% del total de las extorsiones las realizan las pandillas.

Los “imitadores” cuentan con una estructura pequeña y que no suele ser fija, involucran en ella a amigos, familiares y compañeros de prisión según las necesidades. Sus víctimas son seleccionadas al azar y las contactan a través de llamadas o mensajes telefónicos. Los cobros extorsivos en su mayoría son cobros únicos y a veces obtenidos mediante engaños, por lo tanto, la extorsión suele ser casual. Las llamadas a residencias o a personas individuales suelen ser sus víctimas. La mayoría opera desde las cárceles y según los investigadores, el 80% de las extorsiones son cometidas por “imitadores”.

La mayoría de las instituciones del sector de seguridad y justicia han evolucionado para hacer frente al delito de extorsión

Los operativos contra las extorsiones iniciaron en el año 2008. Posterior a ello, la PNC y el MP modificaron sus estructuras para hacer frente de mejor manera al delito de extorsión. En la PNC en 2009 surgió el Programa contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas el cual fue institucionalizado como una unidad en la División Especializada de Investigación Criminal -DEIC- en el año 2011 y se convirtió en una División -DIPANDA- desde 2014. A la fecha, DIPANDA cuenta con once sedes departamentales y municipales.

En el MP, en el año 2009 se creó la Unidad contra las Extorsiones como parte de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. En el año 2015, la unidad se convirtió en la Fiscalía de Sección contra las Extorsiones -FCE- y a la fecha cuenta con nueve sedes departamentales y municipales. También otras instituciones del sector se fueron adaptando con el tiempo. En el año 2014 el Instituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIF- implementó el laboratorio de acústica forense y en 2017 el laboratorio de informática forense, los cuales son utilizados en los casos de extorsión para generar prueba científica al comparar voces o recuperar mensajes borrados en los dispositivos electrónicos incautados.

En el caso del OJ, en el año 2009 se crearon los juzgados y tribunales con competencia de mayor riesgo, competencia que es utilizada para llevar la mayoría de los casos judicializados por la FCE. Además, en el año 2020 se creó el juzgado y tribunal contra las extorsiones. Lamentablemente este último está desintegrado por el fallecimiento de uno de sus jueces, por lo cual únicamente puede conocer los casos de decisión unipersonal. Por su parte, el Instituto de la Defensa Pública Penal -IDPP- cuenta con una unidad de defensores para casos de mayor riesgo, los cuales atienden los casos de extorsiones con competencia de mayor riesgo.

Entre las instituciones del sector seguridad y justicia, el Sistema Penitenciario -SP- es la única institución que no ha tomado medidas relevantes para hacer frente a las extorsiones y contribuir con los esfuerzos que las demás han realizado. Poco efecto tiene que DIPANDA, el MP, el INACIF, el IDPP y el OJ logren llevar un proceso en el que se condene a prisión a los sindicados del delito de extorsión, si estos van a seguir delinquiriendo desde las cárceles.

El descontrol carcelario es el principal problema para contrarrestar las extorsiones

La mayoría de las extorsiones salen desde las cárceles. Según investigadores, el 90% de las extorsiones salen de un recinto carcelario y afecta directamente a la incidencia delictiva en los municipios aledaños a las cárceles. El descontrol carcelario se da por el hacinamiento, la falta de personal operativo y las insuficientes medidas de control interno para evitar la corrupción. Hasta septiembre de 2020, había 25,906 reclusos en cárceles, recintos que en su totalidad contaban con capacidad para 6,800 personas; esto significa una tasa de ocupación del 380% y un hacinamiento de 260%. Durante los últimos 15 años no se ha construido nueva infraestructura penitenciaria y la cantidad de reclusos ha crecido a un ritmo rápido. Tampoco se han implementado medidas alternas al encarcelamiento para evitar esa tendencia.

Las acciones que el SP ha implementado para tratar de contrarrestar las extorsiones que salen desde las cárceles son tres. Primero, desde el año 2005 se han realizado traslados masivos de pandilleros de un centro a otro. Usualmente se traslada a todos los miembros de las pandillas juntos, lo cual no soluciona el problema sino lo cambia de lugar. Solo en el último traslado realizado en septiembre de 2020 a los pandilleros se les dispersó en distintas cárceles. La segunda acción implementada desde el año 2010 es el bloqueo de la señal telefónica en los centros carcelarios, sin embargo, esta ha sido parcial y poco efectiva. La tercera acción han sido las requisas carcelarias con el objetivo de decomisar teléfonos celulares. Sin embargo, según los investigadores, después de una requisa bajan las denuncias de extorsiones por dos o tres días, pero luego vuelven a aumentar. Por lo tanto, se determina que estas tres acciones no son una estrategia sostenible y efectiva para reducir las extorsiones que se realizan desde las cárceles.

Existe poca coordinación con instituciones externas al sector seguridad y justicia

Los actores externos al sector seguridad y justicia pero que necesitan ser involucrados activamente en los esfuerzos por reducir las extorsiones son las empresas telefónicas y el sector bancario. Respecto a las primeras, actualmente no hay un marco regulatorio que defina el bloqueo de la señal de telecomunicaciones. La ley aprobada en 2014 que regulaba la materia, fue declarada inconstitucional y no está vigente. La comunicación y coordinación de las empresas telefónicas con las autoridades del sector seguridad y justicia depende de cada administración.

En relación al sector bancario, la coordinación se ha dado en forma esporádica para temas puntuales. Han participado en algunas campañas de comunicación para que las personas no presten sus cuentas bancarias para el depósito de cobros extorsivos, pero no ha habido esfuerzos en relación al blanqueo del dinero proveniente de las extorsiones.

Recomendaciones

1. ***Incentivar la denuncia de las extorsiones.*** Se recomienda continuar realizando campañas de comunicación para incentivar la denuncia de los ciudadanos y para prevenir el delito. Una mayor cantidad de denuncias proveerá mayor información para desarticular estructuras de extorsionistas. Además, una denuncia a tiempo, con asesoría de parte de los investigadores, puede evitar que una persona caiga en un esquema extorsivo. Se debe informar a la población sobre la forma de operar de los extorsionistas y para la generación de protocolos propios para el uso de teléfonos y de redes sociales. Es necesario promocionar las distintas formas de realizar una denuncia: el número 1574 del MP; la ubicación de las sedes de la FCE y de DIPANDA, entes especializados en la investigación del delito; el sitio web y la app de denuncias del MP y otros medios de denuncia anónima como Crime Stoppers Guatemala.
2. ***Continuar con el fortalecimiento institucional.*** En el inmediato plazo es necesario lograr la integración del tribunal contra las extorsiones. De igual manera, mejorar la coordinación interinstitucional especialmente con el SP, para que los esfuerzos de DIPANDA y el MP no sean en vano; también compartir con el OJ las estrategias de reclusión para que los jueces emitan sus resoluciones tomándolas en consideración. La capacitación constante del personal de las instituciones en las estrategias para la reducción de las extorsiones, es importante. También es necesario que las instituciones se adapten a las nuevas tecnologías y se expandan a nivel territorial según las necesidades y la incidencia delictiva.
3. ***Concretar la coordinación con la Superintendencia de Bancos.*** Además de acciones preventivas, se deben hacer esfuerzos de investigación para frenar el blanqueo de dinero producto de la extorsión. A nivel internacional se ha demostrado que un golpe a las finanzas de los grupos criminales resulta incluso más efectivo que su encarcelamiento, especialmente tomando en cuenta que la situación carcelaria en Guatemala es parte del problema.
4. ***Implementar controles efectivos en el Sistema Penitenciario.*** En el inmediato plazo, se debe implementar una estrategia de reclusión especial para pandilleros e imitadores que continúan realizando extorsiones desde las cárceles. Ello también implica mejorar los controles de ingreso para evitar que sigan entrando teléfonos celulares a las cárceles. Para reducir la corrupción en el SP es necesario establecer una carrera penitenciaria, depurar al personal, y lograr el bloqueo de cualquier tipo de comunicación en los recintos carcelarios. Para esto último se necesita llegar a un acuerdo con las empresas telefónicas y establecer un convenio de cooperación. A largo plazo, es necesario reducir el hacinamiento implementando medidas alternas al encarcelamiento y construyendo nueva infraestructura que sea administrada bajo el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria. De igual manera, construir cárceles de máxima seguridad para los perfiles de reclusos que así lo requieran.